

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Una vez efectuado el estudio del proceso donde es demandante el señor **OCARIS DE JESÚS CORREA CORREA** y demandado la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, proceso tramitado bajo el radicado único nacional N° 05088-31-05-001-2017-01102-01, se advierte la ocurrencia de varias causales de nulidad, que impiden la resolución del grado jurisdiccional de consulta ordenado a favor de la parte demandante, como da cuenta la siguiente crónica procesal,

ANTECEDENTES

Mediante providencia escrita del 24 de febrero de 2020, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello – Ant., profirió SENTENCIA ANTICIPADA al interior del proceso ordinario laboral de la referencia, acogiendo la solicitud que en dicho sentido le hiciera la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – ANDJE, en consecuencia, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por el señor OCARIS DE JESÚS CORREA CORREA, declarando probada la excepción de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INCREMENTOS PENSIONALES” propuesta por dicha entidad, fundamentó su decisión en los razonamientos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-140 de 2019, según la cual, los incrementos pensionales por personas a cargo desaparecieron del ordenamiento jurídico, con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones - Ley 100 de 1993, y solo resultan aplicables a aquellos pensionados que consolidaron su derecho con anterioridad al 1º de abril de 1994.

Pues bien, con el trámite impartido en la primera instancia, se advierte por

parte de la Sala que el juzgado de conocimiento incurrió en las causales de nulidad 5º y 6º del Código General del Proceso, así como en la consagrada en el artículo 42 del Código Procesal del Laboral y de la Seguridad Social, como pasa a exponerse bajo las siguientes;

CONSIDERACIONES

Los numerales 5º y 6º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 45 del CPL y de la S.S., en su orden establecen:

ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. *El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

(...)

5. *Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.*

6. *Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.”*

A su turno, el artículo 42 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, dispone:

“ARTICULO 42. PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y PUBLICIDAD. *«Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1149 de 2007. ...Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad...”*

Por su parte, el artículo 278 del Código General del Proceso, establece las causales de procedencia de la sentencia anticipada así:

“(...) En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. *Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*

2. *Cuando no hubiere pruebas por practicar.*

3. *Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa (...).”*

Si bien es cierto, la sentencia anticipada en materia laboral es plenamente procedente, pues afirmar lo contrario, sería desconocer la finalidad de esta figura,

consistente en materializar los principios de celeridad y economía procesal, también consagrados el artículo 48 del Código Procesal Laboral, y 4° de la Ley 270 de 1996, y el carácter supletivo de las disposiciones del estatuto general procesal, que en virtud del principio de integración normativa, conforme al artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se permite aplicarlas en el trámite adjetivo laboral, entre estas, la sentencia anticipada.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el administrador de justicia, tiene unos deberes, entre los cuales se encuentra el de *“procurar la mayor economía procesal, dictar las providencias dentro de los términos legales y otros deberes consagrados en la ley”* (numerales 1, 8 y 15 del artículo 42 del Código General del Proceso).

Y dentro de esos otros deberes consagrados en la ley, está el indicado en el inciso 3° del artículo 278 del CGP, el cual dispone que: *“En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos...”* y es solo bajo esas tres especialísimas causales, que se permite la pretermisión de algunas etapas procesales en procura de la realización del principio de economía procesal, evitando el desgaste de la administración de justicia, y procurando la realización de la eficiencia, celeridad y tutela efectiva de los derechos.

No obstante, en el caso concreto las partes no solicitaron, de común acuerdo, el proferimiento de una sentencia anticipada; además existían pruebas que practicar, tendientes a la demostración de los supuestos de convivencia y dependencia económica anunciados en la demanda; y es que, frente a esta causal, al ser la aducida por el juzgador primario, no se debe olvidar lo señalado por la jurisprudencia especializada que al respecto indica:

“...el legislador le impuso al juez la obligación de poner fin a las controversias con prontitud en los eventos en que es innecesario agotar otras etapas o diligencias para definir una situación jurídica, lo cual, guarda armonía con los principios de eficiencia y celeridad de la administración de justicia. Pero, la obligación de culminar la causa con premura, en particular cuando «no hubiere

pruebas por practicar», debe ser aplicada con prudencia, pues, el juez no puede omitir la práctica de un elemento de convicción fundamental para la decisión definitiva, ya que vulneraría el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia de las partes. Por tal razón, al hacer uso del deber de dictar sentencia anticipada, la autoridad judicial está obligada a evaluar las particularidades de la controversia, la pertinencia y la conducencia de los medios de convicción solicitados en la causa y si resulta pertinente la práctica de otros con trascendencia en el asunto, para establecer si es posible en el escenario del proceso, tomar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico”¹

Y finalmente tampoco estaba probado en el sub lite, la ocurrencia de los fenómenos jurídicos de cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva, ni carencia de legitimación en la causa.

Dejando en claro la Sala que la expedición de la sentencia SU-140 de 2019, en la que se fundamentó la sentencia de primer grado para declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar incrementos pensionales, no constituye en sí misma una causal de sentencia anticipada, que pueda ser acogida por el juez a motu propio para proferir una decisión final pretermitiendo las etapas procesales establecidas por la ley preexistente, y que son garantía del debido proceso a las partes.

Sumado a lo anterior, también se observa por parte de esta colegiatura, que no sólo se profirió una sentencia anticipada, escrita, sino que además se omitió notificar tal decisión a las partes con la respectiva anotación en estados, conforme al artículo 295 del Código General del Proceso.

En ese orden de ideas, al desconocerse el principio de oralidad, ciertamente se incurrió en la causal de nulidad específica prevista en el artículo 42 del Código Procesal Laboral antes citado, e igualmente, al no ser procedente la sentencia anticipada como se indicó en precedencia, el fallador de instancia, infringió las causales de nulidad previstas en los numerales 5º y 6º del artículo 133 del Código

¹ Sentencia STC3529 del 20 de marzo de 2019

General del Proceso, siendo la primera de estas causales insaneable, en virtud de la previsión del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y en segundo lugar, por el carácter suprallegal, al tratarse de la infracción de las reglas propias del juicio, y una garantía del debido proceso constitucional consagrado en el artículo 29 superior.

Es por ello que, habrá de declararse la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto proferido el 5 de febrero de 2020, mediante el cual se dispuso señalar fecha para dictar sentencia anticipada, y en su lugar, se fije fecha para la celebración de la audiencia única de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, trámite y juzgamiento prevista en el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Sin COSTAS en esta actuación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR la **NULIDAD** de todo lo actuado a partir del auto proferido el 5 de febrero de 2020, mediante el cual se dispuso señalar fecha para dictar sentencia anticipada, y en su lugar, se fije fecha para la celebración de la audiencia única de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, trámite y juzgamiento prevista en el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia actuación.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para el trámite pertinente.

Lo resuelto se ordena notificar por **ESTADOS**, y para constancia se firma.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **098** del **8 de junio de 2021**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>